



Implicaciones geopolíticas de la apertura fronteriza en Norte de Santander análisis de la expansión del GAO y amenazas transnacionales 2022-2024

MY. (EJC) Herrera Ramírez Cesar Julián

Artículo para optar al título profesional:
Magister en Estrategia y Geopolítica

Escuela Superior de Guerra "General Rafael Reyes Prieto"
Bogotá D.C., Colombia
2025

DATOS GENERALES	
Nombre del estudiante	: Herrera Ramírez Cesar Julián
Identificación	: 1.098.636.811
Programa académico	: Maestría en estrategia y geopolítica
Tutor metodológico	: My (R) PhD Oscar Orlando Porras Rodríguez
Tutor temático	: Tc (R) Pablo Andrés Pinzón Ramírez
Fecha de entrega	: 28 de Agosto de 2025
Extensión	: 11000 palabras

DECLARACIÓN DE ORIGINALIDAD Y CESIÓN DE DERECHOS

El autor declara que este artículo fue escrito de acuerdo con la normatividad de la Escuela Superior de Guerra “General Rafael Reyes Prieto” (ESDEG) y no existe ningún potencial conflicto de interés relacionado con este. Las posturas y aseveraciones presentadas son resultado de un ejercicio académico e investigativo que no representan la posición oficial ni institucional de la ESDEG, las Fuerzas Militares de Colombia o el Ministerio de Defensa Nacional.

Este artículo es enteramente mi propio trabajo y no ha sido presentado para la obtención de un título en esta u otra Institución de Educación Superior. Se han referenciado todos los trabajos y puntos de vista de otros autores, así como los datos de otras fuentes utilizadas. No se emplearon herramientas de generación de contenido por Inteligencia Artificial para su elaboración.

El autor acepta ceder los derechos de publicación en favor de la ESDEG y su Sello Editorial de acuerdo con los términos de la licencia Creative Commons: [Reconocimiento-NoComercial-SinObrasDerivadas](#).

AUTORIZACIÓN DE PUBLICACIÓN

El autor autoriza que este artículo sea publicado por el Sello Editorial ESDEG en su repositorio institucional y esté disponible bajo una modalidad de [acceso abierto](#).

Implicaciones geopolíticas de la apertura fronteriza en Norte de Santander análisis de la expansión del GAO y amenazas transnacionales 2022-2024

Geopolitical implications of border opening in Norte de Santander analysis of GAO expansion and transnational threats 2022-2024

Herrera Ramírez Cesar Julián¹

Escuela Superior de Guerra “General Rafael Reyes Prieto”

Resumen: Este artículo analiza las implicaciones geopolíticas desde de la normalización de la frontera entre Colombia y Venezuela en el departamento de Norte de Santander, entre 2022 y 2024, y su incidencia en el fortalecimiento de grupos armados y amenazas transnacionales. Se empleó una metodología cualitativa de tipo descriptivo basada en revisión documental, que permitió examinar transformaciones en la seguridad regional, el control territorial y el funcionamiento de economías ilícitas. De modo que, los resultados evidencian un aumento en la presencia de actores armados ilegales, el debilitamiento del control estatal y la consolidación de dinámicas delictivas que afectan la estabilidad regional. Se concluye que la gestión fronteriza ha sido insuficiente para contener estos fenómenos, lo que exige el fortalecimiento de la presencia institucional y la cooperación binacional, así como el diseño de estrategias integrales de seguridad e inteligencia para mitigar los riesgos derivados de la reapertura.

Palabras clave: Cooperación internacional, Economía ilegal, Fronteras, Geopolítica, Grupos armados, Seguridad regional.

Abstract: This article analyzes the geopolitical implications of the opening of the border between Colombia and Venezuela in the department of Norte de Santander, between 2022 and 2024, and its impact on the strengthening of armed groups and transnational threats. A descriptive qualitative methodology based on documentary review was used to examine transformations in regional security, territorial control and the functioning of illicit economies. The results show an increase in the presence of illegal armed actors, the weakening of state control and the consolidation of criminal dynamics that affect regional stability. It is concluded that border management has been insufficient to contain these phenomena, which requires the strengthening of institutional presence and binational cooperation, as well as the design of comprehensive security and intelligence strategies to mitigate the risks arising from the reopening of the border.

Keywords: International cooperation, Illegal economy, Borders, Geopolitics, Armed groups, Regional security.

¹ Alumno.

Introducción

La reactivación de la frontera entre Colombia y Venezuela, anunciada oficialmente en 2022 tras varios años de cierre parcial y tensiones diplomáticas, ha generado una reconfiguración sustancial del panorama geopolítico en la región de Norte de Santander. Este departamento, históricamente atravesado por dinámicas de contrabando, migración masiva, y presencia de actores armados ilegales, se ha visto impactado por el restablecimiento del tránsito binacional. Diversos informes de organismos internacionales y entidades nacionales han advertido un incremento en las economías ilícitas, el flujo de mercancías ilegales y el fortalecimiento de redes criminales que operan a ambos lados de la frontera. Según el Observatorio de Seguridad Ciudadana, entre 2022 y 2023 se documentó un aumento del 17 % en las acciones armadas en el Catatumbo, región clave del departamento, donde hacen presencia grupos armados organizados y redes transnacionales de narcotráfico.

Al respecto, el problema de investigación se sitúa en un contexto de vulnerabilidad estatal, donde el restablecimiento fronterizo, lejos de fortalecer la cooperación y el desarrollo regional, ha sido aprovechada por estructuras criminales para expandirse y consolidarse. Las consecuencias de esta situación incluyen el debilitamiento de la seguridad regional, el aumento del reclutamiento forzado, la circulación de armas, y el lavado de activos, afectando directamente a las comunidades locales, al aparato estatal y al equilibrio político bilateral. Esta situación se concentra geográficamente en Norte de Santander, particularmente en los municipios fronterizos como Cúcuta, Villa del Rosario y Tibú, donde convergen la migración irregular, la débil presencia institucional y la disputa territorial de múltiples grupos ilegales.

La pregunta de investigación que guía este estudio es: **¿Cuáles han sido las implicaciones geopolíticas de la apertura de la frontera en Norte de Santander en el crecimiento de los grupos armados organizados y en el incremento de las amenazas transnacionales entre 2022 y 2024?**

Por lo tanto, se justifica por la urgencia de comprender cómo las decisiones de política exterior pueden tener efectos colaterales en la seguridad nacional y regional. Asimismo, la frontera colombo-venezolana representa un nodo estratégico para la estabilidad interna del país, y su inicio requiere ser analizado más allá de sus beneficios diplomáticos o económicos. Identificar los factores que han favorecido la expansión de actores armados ilegales permitirá formular recomendaciones eficaces de política pública y fortalecer la gobernabilidad en zonas de frontera.

A lo largo del documento, el lector encontrará una caracterización del contexto fronterizo reciente, un análisis comparativo con otras regiones, especialmente la frontera colombo-ecuatoriana, y una reflexión sobre las dinámicas de poder que configuran la actual geografía del conflicto. Finalmente, se presentan recomendaciones orientadas a mejorar la gestión estatal en zonas de frontera, fortalecer la inteligencia estratégica y articular acciones bilaterales para contener el avance de las amenazas transnacionales.

Marco Teórico y conceptual

La normalización de la frontera colombo-venezolana en el departamento de Norte de Santander entre 2022 y 2024 ha generado un escenario geopolítico complejo, donde se entrelazan dimensiones históricas, estratégicas y de seguridad. Para abordar sus

Escuela Superior de Guerra “General Rafael Reyes Prieto”

Bogotá D.C., Colombia

implicaciones, es necesario recurrir a un marco teórico robusto que articule tradiciones clásicas de la geopolítica con enfoques contemporáneos que reconozcan la creciente incidencia de actores no estatales, la transnacionalización del crimen y la transformación de los espacios fronterizos. En este sentido, la presente investigación se fundamenta en una arquitectura conceptual que conjuga geopolítica clásica, crítica y geoestrategia, junto con teorías del poder, la seguridad regional y la gobernanza territorial, enmarcadas en el campo de la Estrategia y la Geopolítica(Martínez et al., 2024).

De modo que, las teorías geopolíticas clásicas permiten comprender cómo el espacio ha sido históricamente concebido como un factor clave en la proyección de poder. Halford Mackinder, en su teoría del Heartland (1904), sostiene que quien controle el núcleo continental euroasiático podrá dominar el mundo, haciendo énfasis en el valor estratégico de los territorios interiores(Duarte, 2015). Alfred Mahan, por su parte, introduce la importancia del poder marítimo, al argumentar que las rutas navales y los mares controlados son esenciales para ejercer influencia global(Baqués, 2019). Nicholas Spykman, al desarrollar su concepto del Rimland, contrapone ambas visiones al plantear que el dominio geopolítico se define en los bordes costeros del continente euroasiático, desde donde se articulan las principales rutas comerciales y zonas de contención(Chaliand, 2024). Si bien estos modelos se formularon en contextos de rivalidad imperial, sus lógicas continúan vigentes en regiones como Norte de Santander, donde el control territorial no solo responde a intereses estatales, sino también a la disputa entre redes criminales transnacionales por corredores estratégicos para el tráfico de drogas, armas y personas.

En ese sentido, la geopolítica crítica, desarrollada por autores como Gearóid Ó Tuathail y Simon Dalby, ofrece una lectura alternativa al señalar que las concepciones espaciales del poder no son neutrales, sino construcciones discursivas que legitiman políticas de exclusión, militarización y securitización (González, 2017). De modo que, esta corriente permite interpretar la reapertura fronteriza no solo como una acción diplomática, sino como un evento que reconfigura narrativas de amenaza y control en territorios históricamente marginados. En este enfoque, el Estado no actúa como una entidad homogénea, sino como un actor en competencia con otros centros de poder que disputan la legitimidad y la eficacia en el gobierno de los márgenes territoriales.

La geoestrategia, en tanto, aporta una perspectiva operativa que permite analizar cómo se articulan los medios disponibles para alcanzar fines políticos específicos dentro de un espacio determinado. Este enfoque reconoce la interacción entre factores físicos, humanos y tecnológicos en la formulación de estrategias estatales y paraestatales. En la frontera colombo-venezolana, la expansión de los Grupos Armados Organizados (GAO) responde a un aprovechamiento táctico del terreno, de los flujos migratorios y de la débil capacidad de control estatal, lo cual exige una respuesta geoestratégica más allá de la acción militar convencional (Martínez Cortés, 2022).

Desde el plano de la seguridad internacional, la teoría de los Complejos de Seguridad Regional (CSR) de Barry Buzan ofrece un marco explicativo de gran valor para esta investigación. Esta teoría establece que los problemas de seguridad en un Estado están íntimamente conectados con los de sus vecinos, formando regiones en las que las amenazas se configuran de manera interdependiente (Buzan, 2008). En este sentido, el deterioro

Escuela Superior de Guerra “General Rafael Reyes Prieto”

Bogotá D.C., Colombia

institucional de Venezuela, la migración masiva y el abandono estatal en zonas colombianas como el Catatumbo han creado un entorno en el que los actores armados y criminales pueden operar con relativa impunidad, constituyendo un complejo de seguridad transfronterizo que exige acciones coordinadas.

Complementariamente, el realismo ofensivo de John Mearsheimer permite entender la expansión de influencia como una lógica natural del sistema internacional anárquico. Desde esta perspectiva, el Estado colombiano busca proyectar control sobre su frontera no solo para preservar su integridad territorial, sino para prevenir que actores hostiles, estatales o no, utilicen esos espacios como plataformas de poder. No obstante, el realismo neoclásico, desarrollado por autores como Gideon Rose y Norrin Ripsman, advierte que la política exterior y la estrategia nacional también están condicionadas por factores internos como la cohesión estatal, la percepción de amenazas y las capacidades institucionales. En Norte de Santander, la limitada presencia institucional, la corrupción y la fragmentación del control territorial explican por qué, a pesar de los objetivos declarados, el Estado no ha logrado contener de manera efectiva la expansión del GAO(Suarez, 2024).

La noción de poder nacional, entendida como la capacidad de un Estado para influir en su entorno mediante el uso combinado de medios duros y blandos, resulta central para este análisis. Joseph Nye distingue entre *hard power* capacidad coercitiva y económica y *soft power* capacidad de atracción, legitimidad y diplomacia(Gomichon, 2013). En el caso colombiano, el desequilibrio entre estas dimensiones ha limitado la construcción de autoridad legítima en zonas fronterizas, lo que ha permitido que actores armados impongan normas,

Escuela Superior de Guerra “General Rafael Reyes Prieto”

Bogotá D.C., Colombia

tributos y modelos de organización económica, desplazando al Estado y afectando su soberanía de facto.

La creciente relevancia de actores no estatales en la dinámica geopolítica actual obliga a repensar el rol del Estado en la gestión de conflictos y la provisión de seguridad. Grupos criminales como el Ejército de Liberación Nacional (ELN), disidencias de las FARC y estructuras del narcotráfico no solo disputan el control territorial, sino que también establecen relaciones sociales, económicas y políticas con las comunidades locales. Esta situación genera lo que algunos autores denominan orden no estatal, en el que el poder no emana exclusivamente de las instituciones legítimas, sino de alianzas informales, coerción armada y redes clientelares (Reyes, 2022).

Los conceptos de frontera, seguridad multidimensional, gobernanza territorial y orden global emergente articulan las dimensiones espaciales y funcionales del análisis. La frontera es concebida como un espacio socialmente construido, permeable y cambiante, donde convergen dinámicas legales e ilegales, locales e internacionales (Sassen, 2014). La seguridad multidimensional, como la propone la Organización de Estados Americanos, incluye amenazas militares, económicas, ambientales, sociales y sanitarias, todas presentes en la región analizada (Blackwell, 2021). De modo que, la gobernanza territorial, por su parte, refiere a la capacidad del Estado para ejercer autoridad efectiva sobre su territorio a través de instituciones, normas y servicios; su ausencia da paso a la informalidad, la ilegalidad y la violencia (Agnew, 2006). Finalmente, el orden global emergente, marcado por la multipolaridad y la fragmentación de la autoridad, plantea nuevos desafíos a los Estados

periféricos que deben gestionar amenazas transnacionales sin el respaldo suficiente del sistema internacional.

Este entramado teórico se vincula directamente con fenómenos actuales como el crimen transnacional, la migración forzada y la competencia por recursos estratégicos, que configuran nuevas zonas de conflicto y redefinen la noción de seguridad. En la frontera colombo-venezolana, estos elementos coexisten y se retroalimentan, haciendo indispensable una mirada intersectorial e intergubernamental. La ausencia de una política integral de control fronterizo ha dejado un vacío que ha sido llenado por redes ilegales, transformando el territorio en un nodo de articulación del crimen organizado en América Latina.

Metodología

El presente estudio adopta un enfoque cualitativo - descriptivo, el cual permite analizar las implicaciones geopolíticas de la normalización fronteriza en Norte de Santander desde una perspectiva estructurada y detallada. Este enfoque es pertinente para examinar los cambios en la seguridad regional, la expansión de los Grupos Armados Organizados (GAO) y las amenazas transnacionales en el periodo 2022-2024. A través de la recopilación de información documentada, se busca caracterizar los fenómenos asociados a la dinámica fronteriza, sin intervenir directamente en el contexto observado (Hernández et al., 2010).

Para ello, se emplea la técnica de revisión de bibliografía que abarca fuentes secundarias, incluyendo artículos científicos, informes institucionales, reportes de organismos internacionales y documentos de análisis estratégico. Por ende, la selección de estas fuentes permite obtener una visión amplia de la problemática, con datos actualizados y

verificables que sustentan el análisis. Esta estrategia facilita la identificación de tendencias y patrones que explican la evolución de la situación fronteriza y sus efectos en la seguridad nacional (Hernández et al., 2010) .

Tabla 1. Cuadro metodológico

Objetivo específico	Actividades	Instrumentos de recolección	Producto esperado
Analizar las implicaciones geopolíticas de la apertura fronteriza en Norte de Santander (2022–2024).	Revisión sistemática de artículos, informes oficiales y documentos de política.	Fichas de lectura, matriz temática de análisis.	Síntesis de variables geopolíticas y su incidencia en la región.
Identificar la expansión de los Grupos Armados Organizados (GAO).	Revisión de alertas tempranas, reportes de seguridad y bases de datos de ONG.	Matriz comparativa de presencia GAO, cronología de eventos.	Línea de tiempo de expansión y dinámicas territoriales.
Examinar amenazas transnacionales vinculadas a la reapertura.	Estudio de informes internacionales (ONU, OIM, OEA).	Tabla de factores de riesgo transnacional, mapas conceptuales.	Identificación de patrones y tendencias de criminalidad.
Evaluar la respuesta estatal y binacional frente al fenómeno.	Análisis de planes de seguridad, PDET, acuerdos Petro–Maduro.	Matriz FODA y tabla de políticas públicas.	Diagnóstico crítico sobre limitaciones y avances estatales.

Fuente: Elaboración propia con base en Borrero (2022); Defensoría del Pueblo (2024a); Lagos (2024); Nye (2010); Organización Internacional para las Migraciones (2024).

La tabla sintetiza información obtenida de diferentes fuentes académicas e institucionales, organizándola en categorías que facilitan el análisis comparativo del fenómeno fronterizo. Se construyó a partir de la revisión de literatura especializada y reportes recientes, lo que permitió integrar conceptos teóricos con datos empíricos en un formato estructurado. De esta manera, la elaboración propia con base en autores y organismos de referencia asegura una interpretación coherente y actualizada, ofreciendo al lector una visión clara de los principales factores que inciden en la seguridad y gobernanza territorial en Norte de Santander(Quispe, 2023).

De la misma manera, el diseño bibliográfico utilizado en la investigación se basa en el análisis de documentos relevantes que aborden la seguridad fronteriza, el impacto de la migración, la expansión de economías ilegales y las respuestas estatales ante estas amenazas. Se analizan estudios previos sobre la región de Norte de Santander, permitiendo contextualizar los eventos recientes dentro de un marco histórico y teórico. Asimismo, se examinan políticas gubernamentales y estrategias de seguridad implementadas en el área, evaluando su efectividad y limitaciones.

Antecedentes históricos y factores geopolíticos en la frontera colombo-venezolana

En el presente apartado del artículo se examinan los antecedentes históricos y los factores geopolíticos que configuran la dinámica actual de la frontera colombo-venezolana, entendida como un espacio de alta sensibilidad estratégica para ambos Estados. En efecto, la franja limítrofe ha sido históricamente escenario de múltiples procesos de interacción tanto formales como informales, que incluyen movilidad poblacional, comercio transfronterizo, tensiones diplomáticas y presencia de actores armados no estatales. El análisis parte de una revisión del papel histórico de la frontera como zona de contacto y fricción, para luego identificar los elementos geoestratégicos que han determinado su relevancia creciente en la agenda de seguridad y defensa nacional.

A partir de una perspectiva geopolítica crítica, se reconoce que esta frontera no solo es una línea divisoria entre dos Estados, sino un espacio donde confluyen intereses políticos, económicos y militares con efectos regionales. En este sentido, se abordan factores como la alta porosidad territorial, la crisis migratoria venezolana, la expansión de economías ilegales

Escuela Superior de Guerra “General Rafael Reyes Prieto”

Bogotá D.C., Colombia

y la presencia de GAO como elementos que han alterado los equilibrios tradicionales de poder. Esta sección busca contextualizar la problemática actual desde una mirada estructural, identificando cómo el devenir histórico y los determinantes geopolíticos han configurado un escenario de gobernanza fragmentada y competencia estratégica en la región fronteriza.

Evolución histórica de la frontera colombo-venezolana

La frontera colombo-venezolana, que se extiende por más de 2.200 kilómetros, ha sido históricamente un espacio de tensiones, negociaciones y reconfiguraciones geopolíticas constantes. De modo que, lejos de ser una línea estática que delimita soberanías nacionales, esta frontera ha funcionado como un territorio dinámico donde confluyen intereses políticos, económicos, culturales y de seguridad, moldeando las relaciones bilaterales entre Colombia y Venezuela desde el siglo XIX hasta la actualidad. En efecto, se propone una lectura estructurada y crítica de dicha evolución histórica, articulando los hitos diplomáticos con los factores ideológicos, sociales y estratégicos que han condicionado el presente y configurado un escenario de amenazas transnacionales persistentes (Borrero, 2022).

La historia fronteriza entre Colombia y Venezuela está íntimamente ligada al proceso de disolución de la Gran Colombia (1830) y a las disputas territoriales heredadas del periodo colonial español. En este contexto, el Tratado Michelena-Pombo de 1833 representó uno de los primeros esfuerzos bilaterales por establecer una delimitación clara. Sin embargo, este tratado nunca fue ratificado por Venezuela, lo que evidenció desde temprano las dificultades para establecer una base jurídica estable en la relación limítrofe. La ambigüedad heredada del sistema de intendencias coloniales fue el germen de múltiples reclamos territoriales

posteriores, especialmente en zonas de difícil acceso como el Catatumbo, el Táchira y la región del Alto Orinoco(Palacios, 2021).

El Laudo Arbitral Español de 1891, emitido por la reina regente María Cristina de Habsburgo, marcó un punto de inflexión al ofrecer un marco de delimitación aceptado por ambas partes, aunque no exento de disputas. A pesar de su carácter vinculante, la implementación del laudo generó nuevas fricciones sobre el terreno, en parte debido a la falta de capacidad estatal para ejercer soberanía efectiva en áreas periféricas, fenómeno común en ambos países durante el siglo XIX(Arroyo, 2013).

Durante gran parte del siglo XX, la frontera colombo-venezolana se consolidó como bajo un territorio de tránsito informal y amparado dentro del comercio binacional generando todo tipo de tensiones intermitentes. Por lo tanto, la migración pendular, impulsada por factores económicos y culturales, fortaleció vínculos entre comunidades fronterizas que, en muchos casos, se identificaban más entre sí que con sus respectivos Estados nacionales. Igualmente, esta realidad socioterritorial contrastaba con las narrativas estatales de seguridad y soberanía, generando una ambigüedad funcional que sería aprovechada más tarde por actores armados ilegales(Navarro & Cristancho, 2023).

Al mismo tiempo, la consolidación de regímenes militares y luego populistas en Venezuela, junto con la persistencia del conflicto armado colombiano, complejizó el escenario fronterizo. La influencia del bolivarianismo, reinterpretado ideológicamente por el gobierno de Hugo Chávez a partir de 1999, promovió una visión de integración latinoamericana en contraposición al alineamiento estratégico de Colombia con Estados Unidos(Díaz, 2019). Por ende, esta divergencia ideológica agudizó las tensiones

interestatales, particularmente en torno al manejo del narcotráfico, la presencia de guerrillas colombianas en territorio venezolano y la ausencia de cooperación en materia de seguridad.

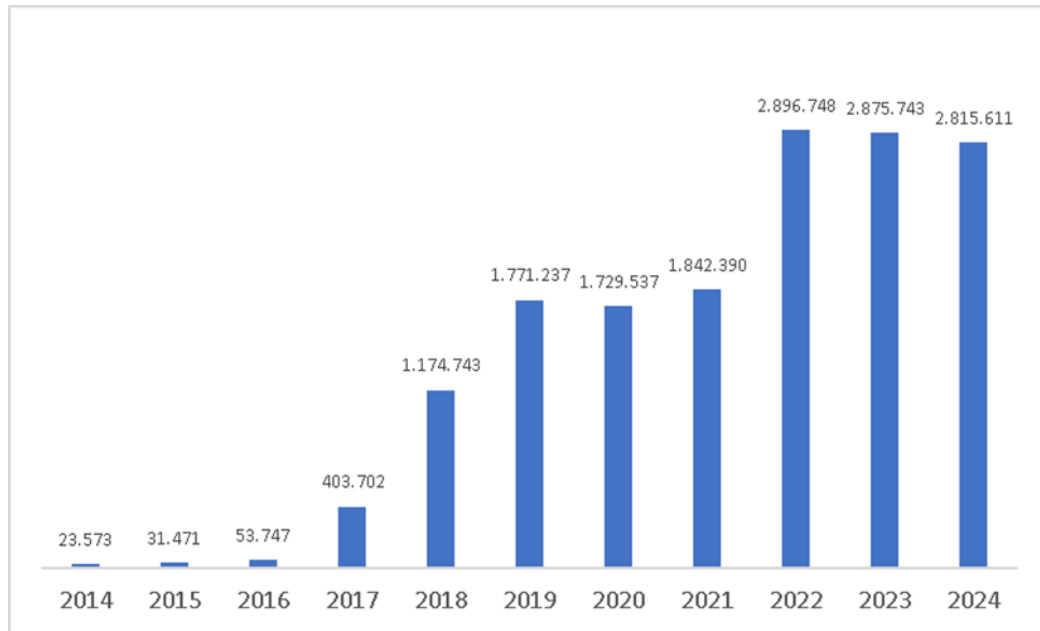
El inicio del siglo XXI estuvo marcado por un deterioro progresivo de las relaciones bilaterales. La crisis diplomática de 2008, provocada por la operación militar colombiana en territorio ecuatoriano que abatió a Raúl Reyes, dirigente de las FARC, tuvo un efecto indirecto en Venezuela, que rompió relaciones diplomáticas con Colombia acusando una política agresiva y militarista. Posteriormente, en 2015, el presidente Nicolás Maduro ordenó el cierre de varios pasos fronterizos y la deportación masiva de colombianos, bajo el argumento de combatir el paramilitarismo y el contrabando (Hernández, 2017).

Durante este periodo, la frontera dejó de ser un espacio administrado bilateralmente y pasó a ser una zona de vacíos institucionales. En estos márgenes, proliferaron actores armados organizados como el ELN, disidencias de las FARC, redes del narcotráfico y contrabandistas de combustible. El río Arauca y el Catatumbo se convirtieron en ejes críticos para el tráfico transfronterizo y el reclutamiento forzado, mientras que la presencia estatal fue reemplazada, en muchos casos, por formas paralelas de autoridad impuestas por grupos criminales.

En concordancia, el cierre fronterizo decretado por Venezuela en 2016, mantenido de forma parcial hasta 2022, tuvo efectos profundos en la seguridad y la economía regional. Lejos de detener los flujos ilegales, el cierre formalizó la utilización de trochas o pasos irregulares, lo que potenció las redes de trata de personas, contrabando de productos, y tráfico de drogas y armas. El desbordamiento del conflicto venezolano hacia Colombia se materializó en el aumento de migración forzada, que alcanzó los 2.8 millones de venezolanos

residiendo en territorio colombiano para 2023, según cifras de Migración Colombia (ICBF, 2025).

Figura 1. Evolución de la migración venezolana en Colombia (2014–2024)



Elaboración propia basada en datos de *Boletines de la Migración. Distribución de Venezolanas(os) en Colombia* (Migración Colombia, 2023),

La figura muestra la evolución del fenómeno migratorio entre 2014 y 2024, evidenciando un crecimiento exponencial a partir de 2017. En los primeros años, las cifras fueron reducidas y de incremento gradual (23.573 en 2014, 31.471 en 2015 y 53.747 en 2016), pero en 2017 se registra un salto significativo con 403.702 personas. Desde entonces, la tendencia se mantiene en ascenso, alcanzando 1.174.743 en 2018 y cerca de 1,7 millones en 2019 y 2020. En 2021 se observa un repunte con 1.842.390, llegando al punto máximo en 2022 con 2.896.748 migrantes. Aunque en 2023 (2.875.743) y 2024 (2.815.611) se aprecia una leve reducción, las cifras se mantienen en niveles muy elevados en comparación con los

primeros años lo que refleja la magnitud y persistencia del flujo migratorio en la última década(ICBF, 2025).

Por consiguiente, este fenómeno, si bien humanitario en su esencia, generó una presión demográfica, institucional y de seguridad sin precedentes, sobre todo en zonas como Cúcuta, Villa del Rosario, Tibú y Puerto Santander. La ausencia de coordinación binacional y el uso de la frontera como instrumento de presión política por parte del gobierno venezolano contribuyeron a erosionar aún más la gobernabilidad en el espacio fronterizo.

Ahora bien, con la llegada del gobierno de Gustavo Petro en 2022, Colombia promovió una reapertura progresiva de los pasos fronterizos como parte de una estrategia diplomática para normalizar relaciones. No obstante, esta apertura no ha estado acompañada de un plan integral de seguridad, desarrollo fronterizo ni gobernanza territorial, lo que ha permitido la continuidad de dinámicas criminales y el fortalecimiento de los GAO.

El documento de Alerta Temprana N.º 027-2024 emitido por la Defensoría del Pueblo de Colombia el 19 de diciembre de 2024 constituye una advertencia estructural sobre el agravamiento de la situación de seguridad en la frontera colombo-venezolana, específicamente en los municipios de San José de Cúcuta, Villa del Rosario, Los Patios y Puerto Santander(Defensoría del Pueblo, 2024b). A partir del análisis territorial, poblacional y del contexto de amenaza, se advierte sobre la consolidación del control territorial de múltiples actores armados ilegales y organizaciones criminales transnacionales, que han multiplicado los riesgos contra la población civil mediante homicidios, desplazamientos forzados, reclutamiento forzado, extorsiones, amenazas, atentados con explosivos y control social violento.

La alerta señala tres escenarios diferenciados de riesgo: el control territorial del ELN en las zonas rurales de Cúcuta y Puerto Santander, la criminalidad organizada y transnacional en las zonas urbanas de Cúcuta, Villa del Rosario y Los Patios, y la expansión del Ejército Gaitanista de Colombia (EGC) que disputa territorios estratégicos por las rentas criminales y el acceso a pasos fronterizos. Se identifican más de veinte estructuras armadas ilegales, incluidas disidencias de las FARC-EP, reductos del EPL, grupos criminales barriales, y redes transnacionales como el Tren de Aragua, AK-47, Autodefensas Unidas Colombo-Venezolanas y La Línea. Estas organizaciones ejercen un dominio creciente sobre el territorio, las economías ilícitas y las comunidades locales.

El documento concluye que la reapertura fronteriza ha facilitado la circulación de actores armados, el tráfico ilegal de bienes y personas, y el reacomodo de las redes criminales. El Estado, con presencia institucional debilitada y capacidades insuficientes, enfrenta el reto urgente de prevenir la expansión de estos actores. La Defensoría recomienda una respuesta integral e interinstitucional basada en inteligencia estratégica, acompañamiento a víctimas, protección de líderes sociales, atención humanitaria, y fortalecimiento de la presencia estatal en los territorios más afectados, como condición necesaria para frenar la consolidación de estos sistemas de violencia híbrida y asegurar la gobernanza legítima en la región fronteriza (Defensoría del Pueblo, 2024a).

En términos estratégicos, la reapertura ha servido como catalizador de conflictos latentes, al evidenciar las debilidades de ambos Estados para controlar sus márgenes territoriales. Esta situación ha consolidado a la frontera como un espacio donde la soberanía es disputada no solo entre Estados, sino también entre estos y una multiplicidad de actores

no estatales que gestionan, regulan y explotan los recursos locales, tanto legales como ilegales.

Factores geopolíticos determinantes en la configuración del conflicto fronterizo

La frontera colombo-venezolana, y en particular el eje geográfico de Norte de Santander constituye uno de los espacios más críticos de la geopolítica regional sudamericana. Su evolución reciente (2022–2024), marcada por la reapertura oficial del paso binacional, ha estado atravesada por la expansión territorial de Grupos Armados Organizados (GAO) y la intensificación de amenazas transnacionales, lo que configura un entorno estratégico de alto riesgo y complejidad creciente. Este análisis se centra en identificar los factores geopolíticos estructurales que han condicionado dicho conflicto fronterizo, articulando categorías clave como soberanía efectiva, criminalidad transnacional, zonas de influencia y gobernanza territorial, a la luz de la vulnerabilidad institucional binacional (ver tabla 1).

Desde una perspectiva estructural, la configuración geopolítica de la frontera ha estado determinada por cinco factores principales: (i) su posición estratégica como corredor intercontinental entre el Caribe, los Andes y la Amazonía; (ii) la fronterización conflictiva, producto de delimitaciones históricas incompletas y tensiones diplomáticas cíclicas; (iii) la debilidad institucional binacional, particularmente en el contexto del colapso institucional venezolano; (iv) las rutas de comercio y narcotráfico, que configuran economías de enclave y corredores ilícitos transnacionales; y (v) los flujos migratorios masivos, que han sido instrumentalizados por estructuras criminales para el reclutamiento, la extorsión y el tráfico de personas (Defensoría del Pueblo, 2024a) (Ver tabla 1).

Escuela Superior de Guerra “General Rafael Reyes Prieto”

Bogotá D.C., Colombia

Tabla 2. Elementos Geopolíticos

Elemento Geopolítico	Explicación
Posición estratégica	La ubicación de Colombia como país bisagra entre Centro y Sudamérica, con acceso a dos océanos y frontera con Venezuela, lo convierte en un territorio de alto valor geopolítico. Norte de Santander es un corredor natural para el comercio, la migración y las economías ilícitas, lo cual lo hace objeto de disputa por grupos armados y redes criminales.
Fronterización conflictiva	La frontera colombo-venezolana ha sido históricamente porosa y conflictiva. La delimitación física se ve superada por realidades sociales y económicas compartidas que han sido instrumentalizadas por actores armados. La reapertura de pasos formales ha generado reacomodos territoriales de los GAO.
Debilidad institucional binacional	La ausencia de coordinación y control efectivo por parte de Colombia y Venezuela, junto con la crisis del Estado venezolano, ha propiciado vacíos de poder. Estos espacios son ocupados por estructuras criminales que actúan como gobiernos de facto, imponiendo normas, cobrando extorsiones y controlando flujos poblacionales y comerciales.
Rutas de comercio y narcotráfico	La frontera es parte de un corredor estratégico para el tráfico de drogas hacia Centroamérica y EE.UU. La existencia de pasos ilegales o trochas facilita tanto el contrabando de mercancías como el movimiento de drogas, armas y personas. Esta red de rutas ilegales está controlada por grupos como el Tren de Aragua, el EGC y el ELN.
Flujos migratorios masivos	La crisis humanitaria venezolana ha producido una migración masiva hacia Colombia. La frontera ha sido usada por redes de trata de personas y tráfico de migrantes. La población migrante, en situación de vulnerabilidad, es frecuentemente reclutada o explotada por grupos criminales.
Zonas de influencia y soberanía efectiva	Municipios como Cúcuta, Villa del Rosario y Puerto Santander presentan una presencia estatal limitada. Los GAO han establecido zonas de influencia territorial donde se reemplaza la autoridad estatal por estructuras de poder no estatales, lo que compromete la soberanía nacional.
Gobernanza fronteriza fragmentada	La ausencia de una política pública articulada para el control de la frontera ha derivado en una gobernanza parcializada, donde múltiples actores (policía, ejército, alcaldías, migración) operan sin coordinación ni cobertura suficiente, generando espacios grises propicios para la criminalidad.
Criminalidad transnacional	Grupos armados como el Tren de Aragua operan de manera transnacional, coordinando redes criminales desde Venezuela hacia Colombia. Utilizan la frontera para escapar de la acción estatal, consolidar rutas de tráfico y establecer enclaves criminales urbanos (e.g., La Parada, El Escobal).
Asimetría económica y centralismo	La región fronteriza no refleja su importancia geoeconómica en el PIB nacional debido al abandono estatal y al centralismo. Esto genera condiciones estructurales que favorecen el surgimiento de economías ilícitas como alternativa de subsistencia para comunidades rurales y urbanas.

Escuela Superior de Guerra “General Rafael Reyes Prieto”

Bogotá D.C., Colombia

Multipolaridad y reconfiguración del orden regional	El interés de potencias emergentes (China, Rusia) y el debilitamiento de EE.UU. como único hegemón generan un contexto multipolar. Colombia no ha aprovechado su posición para proyectarse regionalmente; en cambio, los actores ilegales sí lo han hecho mediante la ocupación de corredores estratégicos.
------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fuente: Elaboración propia

En efecto, la interdependencia asimétrica entre Colombia y Venezuela se ha agravado desde 2015 con el cierre unilateral de la frontera por parte del gobierno venezolano y la posterior ruptura diplomática. A partir de la reapertura en 2022, A partir de la reapertura en 2022, se habilitaron varios puentes internacionales en Norte de Santander, tales como los puentes Simón Bolívar, Francisco de Paula Santander, Atanasio Girardot y La Unión; estos funcionan como los principales pasos fronterizos formales, aunque persisten trochas y cruces informales. De la misma manera, ante la ausencia de poder ha sido capitalizado por estructuras como el Ejército de Liberación Nacional (ELN), el Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), las disidencias de las FARC y redes transnacionales como el Tren de Aragua, consolidando un orden no estatal en amplios sectores de los municipios de Cúcuta, Villa del Rosario, Los Patios y Puerto Santander (SAT 027-2024).

Tabla 3. Cuadro teórico

Objetivo específico	Autor / Año	Concepto clave	Aporte principal
1	Buzan (2008); Nye (2010); Chaliand (2024)	Geopolítica, poder blando y estrategias globales	Permiten interpretar la apertura fronteriza como un hecho geopolítico con efectos en proyección de poder
1	Defensoría del Pueblo (2024a); Sánchez (2025)	Riesgos fronterizos y zona binacional Petro–Maduro	Datos y casos recientes que muestran vacíos de seguridad en la cooperación binacional
2	Arenas et al. (2023); Günther (2024); InSight Crime (2023)	Crimen transnacional y grupos armados organizados	Mapeo de estructuras criminales y su aprovechamiento de la apertura fronteriza

3	Acevedo, Ballesteros & Corcione (2022)	Seguridad humana y multidimensional	Fundamenta un enfoque de política integral que combine desarrollo y control territorial
3	Borrero (2022); Barrientos et al. (2023); Lagos (2024)	Seguridad fronteriza y criminalidad geopolítica	Sustentan la necesidad de lineamientos estratégicos con enfoque geoestratégico

Fuente: Elaboración propia con base en Acevedo, Ballesteros & Corcione (2022); Álvarez (2021); Aliaga (2021); Arenas et al. (2023); Barrientos et al. (2023); Borrero (2022); Buzan (2008); Chaliand (2024); Defensoría del Pueblo (2024a); Günther (2024); InSight Crime (2023); Lagos (2024); Nye (2010); Sánchez (2025).

La dinámica fronteriza en Norte de Santander entre 2022 y 2024 ha estado marcada por la apertura binacional y la posterior reconfiguración de actores armados ilegales, quienes han aprovechado la ausencia de una planeación integral en seguridad y gobernanza para expandir sus operaciones. Factores como la debilidad institucional, la porosidad de los pasos irregulares, el control social ejercido por grupos criminales y la convergencia de economías ilícitas contrabando, narcotráfico y minería ilegal han facilitado la consolidación de amenazas transnacionales. A esto se suma la limitada interoperabilidad entre Colombia y Venezuela para el intercambio de inteligencia, lo que obstaculiza la respuesta coordinada frente a fenómenos como el tráfico de armas, la trata de personas y la migración irregular. En este contexto, se hace evidente la necesidad de articular mecanismos de inteligencia territorial, cooperación internacional efectiva y programas sociales que reduzcan la dependencia de la población hacia estructuras ilegales.

La reapertura fronteriza, lejos de representar una normalización institucional, facilitó una reorganización táctica de los GAO, que aprovecharon la reactivación del comercio binacional informal para intensificar actividades como el contrabando de combustible, el microtráfico, la extorsión a comerciantes y el tráfico de migrantes(Organización

Internacional para las Migraciones., 2024). Las Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo entre 2022 y 2024 dan cuenta de la disputa violenta por el control de estos corredores y del uso de métodos de violencia extrema para consolidar hegemonías territoriales (Defensoría del Pueblo, 2024).

Dicho de otra manera, este entorno ha derivado en una clara disputa por la soberanía efectiva, donde el Estado colombiano mantiene una presencia formal debilitada frente a la imposición paralela de "normas sociales" por parte del ELN en zonas rurales y del Tren de Aragua en barrios urbanos como La Parada y El Escobal. El déficit de gobernanza fronteriza se expresa no solo en términos de control territorial, sino también en la precariedad institucional para garantizar derechos, acceso a servicios básicos y seguridad ciudadana (InSight Crime, 2023).

El concepto de criminalidad transnacional resulta clave para comprender este fenómeno. Como lo indica la Convención de Palermo, se trata de delitos que trascienden fronteras estatales, y cuya estructura operativa se vale de las debilidades normativas, logísticas y políticas de los Estados. En la frontera colombo-venezolana, la transnacionalización del crimen se evidencia en la cooptación de los pasos ilegales, la infiltración en economías formales (venta de divisas, transporte, comercio) y el uso estratégico de la población migrante como fuerza de trabajo capturada (Günther, 2024).

En términos de zonas de influencia, se puede observar una fragmentación territorial donde distintos grupos armados han delimitado espacios de control mediante alianzas, pactos de no agresión o disputas abiertas. Esta lógica ha sido facilitada por el fenómeno de la conurbación fronteriza entre Cúcuta y San Antonio del Táchira, donde la proximidad urbana

impide una demarcación funcional del límite político-administrativo, haciendo ineficaces las estrategias de vigilancia tradicional.

El caso de La Parada en Villa del Rosario es ilustrativo: se trata de una zona de paso intensamente utilizada por migrantes, pero que ha sido cooptada por redes de trata y extorsión, articuladas con actores paramilitares y bandas locales como "Los de Porras" o "El Callejón". A su vez, barrios como Antonia Santos o Sevilla en Cúcuta han sido epicentro de enfrentamientos entre estructuras como AK-47, el EGC y disidencias de las FARC, generando zonas de riesgo persistente, con masacres, desapariciones y reclutamiento de menores(Defensoría del Pueblo, 2024a).

Este contexto revela la existencia de una seguridad regional frágil, donde los instrumentos estatales de contención (policía, ejército, fiscalía) no logran articularse en una política de seguridad integral. A pesar de las iniciativas institucionales como los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) y los planes de seguridad fronteriza, persiste un desequilibrio entre los recursos disponibles, la magnitud de las amenazas y la capacidad de respuesta.

Las amenazas se ven agravadas por la falta de infraestructura estratégica, como lo muestran los vacíos en las redes viales primarias y el abandono de corredores fluviales y ferroviarios, lo que encarece el desarrollo legal y facilita el dominio de las rutas por parte de grupos ilegales. Esta desconexión del Estado con sus márgenes territoriales perpetúa el círculo de ilegalidad y debilidad institucional (Fernández et al., 2023).

Reconfiguración del control territorial por actores armados organizados (2022–2024)

La reapertura oficial de la frontera colombo-venezolana en septiembre de 2022 marcó un punto de inflexión geoestratégico en la región del Norte de Santander-Táchira, reconfigurando el equilibrio de poder entre los Grupos Armados Organizados (GAO) que operan a ambos lados del límite binacional. Esta medida, que buscaba normalizar relaciones comerciales y diplomáticas, tuvo como consecuencia indirecta el rediseño de las lógicas de control territorial por parte de estructuras como el ELN, el EGC (Clan del Golfo), las disidencias del Frente 33 de las FARC, el Tren de Aragua y redes criminales locales. En este contexto, las categorías de soberanía fragmentada, autoridad de facto, enclaves de criminalidad, gobernanza híbrida y economía política del conflicto adquieren plena vigencia para interpretar la situación de seguridad fronteriza entre 2022 y 2024 (Badillo & Bravo, 2020).

Por ende, el proceso de reapertura fronteriza generó un efecto inmediato de normalización criminal: con el levantamiento de controles formales, se ampliaron las posibilidades para que las GAO reconfiguraran sus esquemas de movilidad y consolidaran corredores ilícitos. Tal como se evidencia en las Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo (2022, 2023), zonas como La Parada, Juan Frío, El Dave y comunas urbanas de Cúcuta, experimentaron un incremento sostenido en la presencia armada de grupos que disputan el control de pasos irregulares, la extorsión a migrantes, el microtráfico, y las rutas de contrabando y narcotráfico.

La reapertura facilitó además la consolidación de enclaves de criminalidad donde el Estado colombiano ejerce una soberanía precaria. Estos enclaves, como lo evidencian investigaciones del CINEP y de la Fundación Ideas para la Paz, son dominados por una

Escuela Superior de Guerra “General Rafael Reyes Prieto”

Bogotá D.C., Colombia

gobernanza híbrida, en la que coexisten formas de autoridad estatal formal con el poder de facto de los GAO. Tal situación se observa claramente en el caso de Puerto Santander, donde el ELN y el EGC comparten y segmentan el control de los flujos económicos, apoyándose en redes de corrupción local y alianzas con actores institucionales.

Entre 2022 y 2024, la fragmentación de las economías ilícitas en el Catatumbo y el área metropolitana de Cúcuta —resultado de la pérdida de cohesión de organizaciones tradicionales y del reacomodo tras la firma del Acuerdo de Paz— abrió vacíos de poder en el control de corredores estratégicos. Esta situación fue aprovechada por nuevos actores, que ingresaron mediante alianzas coyunturales con facciones locales, la cooptación de redes comunitarias y el uso de la frontera como zona gris para el contrabando, el narcotráfico y la trata de personas. El Tren de Aragua, por ejemplo, instrumentalizó los flujos migratorios venezolanos para reclutar mano de obra y establecer nodos logísticos en comunas 6 y 7 de Cúcuta, centrándose en actividades como la trata de personas, el sicariato y la extorsión. Las disidencias de las FARC, por su parte, fortalecieron su articulación con carteles mexicanos como el de Sinaloa y el CJNG, en el manejo de rutas que conectan con la Sierra de Perijá y el Zulia venezolano(EFE & AFP, 2025).

El ELN mantuvo una estrategia de expansión territorial en municipios como Tibú y Sardinata, consolidando su dominio sobre cultivos de uso ilícito y laboratorios de producción de clorhidrato de cocaína. Además, ha logrado sustituir mecanismos tradicionales de violencia por formas de cooptación social, imponiendo normas de convivencia, "justicia" paralela y servicios sociales, lo que refuerza su autoridad de facto frente a comunidades rurales abandonadas por el Estado.

El Clan del Golfo, desplazado en parte por el ELN, migró hacia espacios urbanos y periurbanos en Los Patios y Villa del Rosario, donde ha recurrido a la tercerización de actividades como la extorsión y el microtráfico mediante bandas menores como los Porras o los de Pepino. Estas redes locales funcionan como outsourcing criminal, permitiendo que las organizaciones de mayor escala eviten la exposición directa y reduzcan costos operativos (Peñaranda et al., 2022).

El impacto sobre la población civil ha sido profundo y multidimensional. En municipios como Cúcuta y su área rural, se han registrado aumentos en los desplazamientos intraurbanos forzados, especialmente en barrios como Belén, Antonia Santos y Rodeo, como lo documenta el Ministerio de Defensa (2023). Igualmente, Migración Colombia ha alertado sobre el aumento de casos de reclutamiento de niños, niñas y adolescentes venezolanos por parte de estructuras criminales, así como la utilización de migrantes para transporte de mercancías ilegales o mulas (Castro et al., 2022).

En este contexto, la soberanía nacional se ve erosionada por la imposibilidad del Estado colombiano de ejercer el monopolio legítimo de la fuerza en vastos sectores de la frontera. La cooptación institucional, en ambos lados de la línea fronteriza, reproduce un patrón de gobernanza criminal que obstaculiza la formulación de políticas públicas integrales y sostenibles. Las estructuras armadas no estatales no solo ejercen control territorial, sino también simbólico, económico y político, redefiniendo las nociones de autoridad y orden en el espacio fronterizo.

La criminalización de actores regulares, como ha sido documentado ampliamente por Insight Crime (2024), es una amenaza directa a la seguridad nacional. De modo que, la

infiltración de redes de narcotráfico y contrabando en instituciones como la Policía Nacional, el Ejército o las fuerzas armadas venezolanas, ha permitido una expansión sin precedentes del crimen organizado con respaldo estatal parcial.

Frente a este panorama, el Estado colombiano enfrenta retos estratégicos de gran calado: primero, recuperar la presencia integral en la frontera no solo desde la fuerza, sino desde el desarrollo humano, la inversión social y la justicia territorial. Segundo, formular una política de seguridad multidimensional que reconozca la existencia de autoridades armadas no estatales como un fenómeno de facto que requiere estrategias complejas, interdisciplinarias e interinstitucionales. Y tercero, asumir una agenda geopolítica de cooperación binacional que trascienda los ciclos de tensión y distensión política, con mecanismos de seguridad cooperativa, gestión migratoria humanitaria y control fronterizo conjunto (Newton & Manjarrés, 2024).

La reconfiguración del control territorial en Norte de Santander entre 2022 y 2024 no es un fenómeno aislado, sino una expresión de una crisis estructural de gobernabilidad, soberanía y justicia social. El conflicto transnacional que se expresa en la frontera colombo-venezolana es, en esencia, una disputa por la institucionalidad y el poder. Ignorar este hecho es perpetuar el abandono y abrir el camino a una frontera gobernada por la ilegalidad.

Comparación de dinámicas fronterizas: Colombia-Venezuela y Colombia-Ecuador

La frontera entre Colombia y Venezuela, es uno de los espacios limítrofes más complejos de América Latina. Su reapertura oficial en septiembre de 2022, bajo el gobierno del presidente

Escuela Superior de Guerra “General Rafael Reyes Prieto”

Bogotá D.C., Colombia

Gustavo Petro, pretendía normalizar las relaciones diplomáticas rotas desde 2019. No obstante, lejos de mejorar el contexto, se agudizaron fenómenos de violencia, control territorial y crimen transnacional. Localidades como Cúcuta, Villa del Rosario, Arauca, Tibú y Puerto Santander experimentaron una consolidación del poder de grupos armados organizados (GAO) como el ELN, el Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), las disidencias del Frente 33 de las FARC-EP y estructuras criminales transnacionales como el Tren de Aragua.

Uno de los casos más alarmantes fue el denunciado por la Defensoría del Pueblo en su Alerta Temprana 027 de 2024, en la que se documentó la presencia de más de 20 estructuras armadas ilegales controlando pasos irregulares, zonas urbanas y corredores estratégicos. La Parada, por ejemplo, se convirtió en un enclave criminal en el que bandas como “Los de Porras” ejercen control extorsivo sobre migrantes, comerciantes y transportadores. Según InSight Crime (2023), el Tren de Aragua ha extendido sus operaciones desde Venezuela hasta la región del Catatumbo y el Darién, donde reclutan migrantes para actividades ilícitas.

El fenómeno migratorio también agravó el panorama. Según Migración Colombia, para 2023 más de 2.8 millones de venezolanos residían en el país. La reapertura fronteriza coincidió con flujos intensificados por trochas controladas por redes delictivas, lo que convirtió el cruce en una actividad de alto riesgo. Entre los meses de febrero y mayo de 2023, diversas ONG denunciaron casos de explotación sexual, reclutamiento forzado y extorsión de migrantes, especialmente menores de edad.

Desde el punto de vista geopolítico, la ausencia de cooperación militar entre ambos Estados ha facilitado la fragmentación del control territorial. La crisis institucional en Venezuela ha debilitado las capacidades del Estado para ejercer soberanía en sus zonas fronterizas, situación aprovechada por actores armados que consolidan un “orden no estatal” donde imponen normas, tributos y formas paralelas de autoridad, tal como lo documenta Martínez et al. (2024).

Caracterización de la frontera colombo-ecuatoriana: antecedentes y situación actual

La frontera entre Colombia y Ecuador, de aproximadamente 586 kilómetros, ha estado marcada históricamente por una ambigüedad geopolítica derivada tanto de disputas limítrofes no del todo resueltas tras la disolución de la Gran Colombia como por la porosidad de su geografía andino-amazónica. Aunque no ha sido escenario de conflictos armados convencionales entre Estados, sí ha representado una zona de tensiones recurrentes, principalmente por el uso del territorio ecuatoriano como refugio de grupos insurgentes colombianos, particularmente las FARC, lo cual ha generado fricciones diplomáticas de alto nivel, como se evidenció en la crisis de marzo de 2008.

En aquella ocasión, una operación militar colombiana en territorio ecuatoriano culminó con la muerte de Raúl Reyes, segundo al mando de las FARC, lo cual detonó una crisis diplomática entre ambos países. El gobierno de Ecuador, presidido entonces por Rafael Correa, interpretó el acto como una violación grave a su soberanía, reaccionando con la ruptura de relaciones diplomáticas y la movilización de tropas hacia la frontera. Esta situación evidenció no solo la fragilidad de la cooperación bilateral, sino también la

complejidad del triángulo estratégico entre Colombia, Ecuador y Venezuela, donde cada actor poseía intereses de seguridad y posicionamiento regional diferenciados.

A nivel estructural, la frontera colombo-ecuatoriana ha sido históricamente escenario de dinámicas irregulares transfronterizas, como el contrabando, la minería ilegal y el tráfico de armas y personas, facilitadas por la debilidad institucional en algunos sectores rurales y la escasa presencia estatal. Adicionalmente, el flujo migratorio de colombianos hacia Ecuador en contextos de conflicto armado ha implicado desafíos humanitarios persistentes para las autoridades ecuatorianas. La selva amazónica, que predomina en el sur de esta frontera, constituye un entorno propicio para operaciones clandestinas, dificultando la vigilancia efectiva y permitiendo a actores armados mantener santuarios logísticos y corredores de movilidad.

En la actualidad, aunque se han restablecido los canales diplomáticos y existen mecanismos binacionales de cooperación en seguridad y migración, persisten retos significativos. Las dinámicas de violencia asociadas al narcotráfico y la presencia de disidencias armadas continúan proyectando amenazas sobre la frontera, afectando tanto a comunidades colombianas como ecuatorianas. La situación de seguridad en el departamento de Nariño y la provincia ecuatoriana de Esmeraldas se ha visto comprometida por la expansión de grupos armados que buscan controlar rutas de exportación de drogas hacia el Pacífico, incrementando la presión sobre los Estados para fortalecer el control territorial y la gobernanza en la frontera.

Este panorama sugiere la necesidad de una estrategia integral y sostenida de seguridad fronteriza entre ambos países, que combine acciones militares con intervenciones sociales y

Escuela Superior de Guerra “General Rafael Reyes Prieto”

Bogotá D.C., Colombia

económicas que disminuyan la vulnerabilidad de las poblaciones locales. Asimismo, se requiere mayor articulación institucional y cooperación internacional para contener las amenazas transnacionales y evitar que hechos como los de 2008 se repitan. La frontera colombo-ecuatoriana no solo constituye una línea divisoria, sino un espacio vital de interacción geoestratégica que refleja las tensiones no resueltas del posconflicto colombiano y los desafíos de seguridad regional en América del Sur.

Impacto de la reapertura fronteriza en el crecimiento del crimen transnacional

La reapertura de los pasos fronterizos entre Colombia, Ecuador y Venezuela, tras períodos de cierre motivados por crisis diplomáticas y operaciones militares, ha generado consecuencias significativas en términos de seguridad regional. Una de las más visibles ha sido el aumento de actividades delictivas transnacionales, las cuales han encontrado en la flexibilidad del tránsito fronterizo una oportunidad para expandirse. La porosidad de las fronteras especialmente en zonas selváticas y con débil presencia institucional permite que actores no estatales como las guerrillas, los grupos armados organizados (GAO) y las redes de contrabando intensifiquen sus operaciones sin mayores obstáculos (Gangi, 2023).

El caso del contrabando de combustibles desde Venezuela hacia Colombia, descrito en el artículo como una actividad que representa pérdidas millonarias para PDVSA, es un ejemplo claro de cómo la apertura sin medidas de control eficaces puede alimentar economías ilegales. Asimismo, el congelamiento de precios de productos básicos en Venezuela generó un flujo masivo de alimentos hacia Colombia, lo que no solo desabasteció mercados venezolanos, sino que fortaleció estructuras criminales especializadas en tráfico de bienes.

Estas redes, al operar en la informalidad y en corredores sin control, tienden a asociarse con otras expresiones del crimen transnacional, como el lavado de activos y el narcotráfico.

Adicionalmente, la movilidad de las FARC a través de las fronteras ecuatorianas y venezolanas documentada en episodios como el refugio de Raúl Reyes en Ecuador demuestra que los espacios fronterizos abiertos y mal vigilados se convierten en santuarios para estructuras insurgentes (Pizarro, 2024). Tras la reapertura, la capacidad de estos grupos para replegarse, reorganizarse y reabastecerse en países vecinos incrementa su resiliencia operativa, al tiempo que obliga a los Estados a destinar un mayor número de efectivos a la seguridad interior, debilitando otras áreas de control.

El impacto de la reapertura no solo ha sido operativo, sino también estratégico. Al facilitar la circulación de personas y bienes sin controles rigurosos, se generan condiciones ideales para el tráfico de armas, el reclutamiento transfronterizo, la trata de personas y el flujo ilegal de capitales. Además, al quedar expuestos a dinámicas de seguridad difusas y a la falta de cooperación efectiva entre los gobiernos involucrados, los territorios fronterizos sufren una profunda vulnerabilidad institucional, lo que incentiva aún más la consolidación de economías criminales como forma de subsistencia y poder (Arenas et al., 2023).

Tal como lo plantea Martínez et al. (2024, p. 41), la ausencia de una estrategia de gobernanza multinivel en las zonas de frontera ha dificultado la proyección integral del Estado, favoreciendo la consolidación de zonas grises donde la soberanía se encuentra fragmentada. En este sentido, se da respuesta al segundo objetivo específico del estudio, que buscaba identificar y describir las el dinamismo en las relaciones internacionales que han permitido el fortalecimiento del crimen transnacional tras la reapertura fronteriza. El análisis

permitió identificar que, más allá de la porosidad geográfica, el factor determinante ha sido la debilidad estructural del Estado en su capacidad de articulación institucional, respuesta interagencial e inteligencia estratégica anticipativa.

Por tanto, se concluye que la frontera no puede concebirse solo como un límite territorial, sino como un escenario geopolítico en constante disputa, en el cual los actores ilegales implementan tácticas complejas de dominación y búsqueda de legitimidad. Esto exige, más que medidas unilaterales o de corto plazo, una arquitectura institucional robusta que combine soberanía territorial, legitimidad institucional y mecanismos multilaterales de verificación. De lo contrario, la apertura fronteriza corre el riesgo de convertirse en un vector de desestabilización regional antes que en una oportunidad para la integración efectiva.

Recomendaciones estratégicas para el fortalecimiento de la gestión fronteriza

A partir de los hallazgos obtenidos, se recomienda consolidar una arquitectura de gobernanza multinivel que articule de manera efectiva las capacidades del Estado central, los gobiernos regionales y las comunidades locales. Esta articulación debe orientarse a recuperar el control soberano sobre los corredores estratégicos de la frontera, fortaleciendo simultáneamente la legitimidad institucional mediante la provisión de servicios básicos y mecanismos de resolución de conflictos. Así, se avanza hacia una gestión fronteriza que no se limite al despliegue coercitivo, sino que integre enfoques de seguridad humana, inclusión territorial y desarrollo sostenible.

De igual forma, se propone robustecer los sistemas de inteligencia estratégica con capacidades tecnológicas geoespaciales, que permitan anticipar y contener amenazas transnacionales de forma eficaz. Esta medida debe estar acompañada de protocolos de cooperación binacional verificables con Venezuela, fundamentados en esquemas de seguridad cooperativa y supervisión multilateral. En este sentido, la frontera se reconoce como un espacio geopolítico donde confluyen intereses estatales, redes ilícitas y comunidades transfronterizas, por lo que su gestión debe responder a la complejidad del entorno con estrategias integrales, legítimas y sostenibles.

Lineamientos para una política de seguridad fronteriza con enfoque geoestratégico

A partir de la reapertura fronteriza en 2022, se ha observado un fenómeno de recomposición territorial en el que los Grupos Armados Organizados (GAO) han consolidado su presencia, tanto en zonas rurales del Catatumbo como en sectores urbanos periféricos de Cúcuta, Villa del Rosario y Puerto Santander. Esta expansión no se produce en el vacío, sino que responde a una lógica de aprovechamiento de corredores estratégicos, lo cual puede ser comprendido a través de la teoría del espacio vital (Lebensraum) formulada por Friedrich Ratzel (Smith, 1980). En efecto, este autor sostenía que, tanto los actores políticos estatales como los no estatales, tienden a expandir su presencia hacia territorios que les ofrecen recursos, facilidades de movilidad, condiciones de refugio y capacidad para proyectar su poder. En el contexto fronterizo actual, los GAO han transformado los espacios limítrofes en áreas

funcionales para sus operaciones ilícitas, ocupando el vacío estatal y ejerciendo soberanía de facto (Paulsen, 2017).

Desde la perspectiva de la geoestrategia, este fenómeno representa una amenaza directa a la seguridad nacional, ya que pone en evidencia que el Estado colombiano ha perdido el monopolio del control territorial en sectores críticos (Rosales, 2005). La presencia militar, aunque significativa, ha sido insuficiente para desarticular las estructuras logísticas y sociales que sostienen a los GAO. En este punto, se hace necesario considerar el aporte de la teoría del poder nacional de Joseph Nye, quien distingue entre hard power (capacidad coercitiva) y soft power (capacidad de atracción) (J. Nye, 2010). En la frontera, el predominio del poder duro no ha estado acompañado por estrategias de atracción estatal, como inversión social, justicia y servicios básicos, lo cual debilita la legitimidad institucional y facilita la adhesión de la población a estructuras criminales que sí suplen, en parte, esas necesidades (J. S. Nye, 2010).

De la misma manera, el enfoque de seguridad multidimensional, promovido por la Organización de Estados Americanos (OEA), ofrece un marco más adecuado para abordar la complejidad de esta región (Acevedo et al., 2022). Por ende, esta visión reconoce que las amenazas contemporáneas no son únicamente militares, sino que también incluyen fenómenos como la pobreza, la exclusión social, la migración forzada y la criminalidad organizada. Aplicar este enfoque a la frontera colombo-venezolana implica construir una política de seguridad integral que no se limite a la presencia de fuerza pública, sino que articule instituciones del sector salud, educación, infraestructura y desarrollo rural en función de la estabilización del territorio.

En este contexto, las teorías de gobernanza territorial aportan elementos para comprender por qué la fragmentación institucional ha sido un factor decisivo en la pérdida de control estatal. La falta de coordinación entre Migración Colombia, las Fuerzas Militares, la Policía Nacional y las autoridades locales ha dado paso a una gobernanza disfuncional, donde cada institución actúa bajo lógicas y tiempos distintos (Ardila et al., 2021). Esta situación se ve agravada por la debilidad estructural del Estado venezolano, cuya ausencia de interlocución impide la gestión compartida de amenazas que, por definición, son transnacionales. Según Barry Buzan, este tipo de relaciones interdependientes en contextos fronterizos constituyen complejos de seguridad regional, en los que la inseguridad de un Estado se ve amplificada por las debilidades del vecino, obligando a adoptar respuestas coordinadas y regionales (Barrientos et al., 2023).

Por otra parte, la reapertura fronteriza sin una planificación en seguridad se puede interpretar también a la luz de la geopolítica crítica, que subraya cómo las decisiones gubernamentales se justifican mediante narrativas que omiten o minimizan las realidades sobre el terreno (Rosales, 2005). El gobierno colombiano presentó la reapertura como un avance diplomático, pero no consideró que, sin un acompañamiento operativo e institucional, esta acción fortalecería estructuras ilegales ya arraigadas. Como lo sugiere Ó Tuathail, los discursos de poder configuran la geografía del conflicto, invisibilizando la precariedad estatal y desplazando el foco de atención hacia una supuesta normalización fronteriza que, en la práctica, no existe (Dalby, 1996).

En este panorama, la reapertura no ha representado una oportunidad de desarrollo, sino una reconfiguración del poder criminal en la frontera, lo que demuestra la necesidad de

Escuela Superior de Guerra “General Rafael Reyes Prieto”

Bogotá D.C., Colombia

diseñar políticas basadas en una lectura estratégica del territorio. En julio de 2025, los presidentes Gustavo Petro y Nicolás Maduro firmaron un memorando de entendimiento para crear una zona económica binacional en los estados venezolanos de Táchira y Zulia y los departamentos colombianos de Norte de Santander y La Guajira. Aunque el acuerdo fue presentado como un instrumento de integración, paz y desarrollo incluyendo comercio, agroindustria y servicios sociales compartidos surgieron críticas que lo consideran una amenaza a la soberanía, especialmente en territorios dominados por grupos como el ELN, las disidencias de las FARC y el Tren de Aragua. Estos riesgos se vuelven más relevantes en una región donde actores armados consolidan control territorial precisamente en zonas porosas y con limitada presencia estatal. Por ello, una política fronteriza con enfoque geoestratégico debe combinar inteligencia territorial, observación social, participación comunitaria y despliegue institucional sincronizado. Además, es fundamental integrar tecnologías de vigilancia, interoperabilidad de datos entre entidades y programas sociales que eviten que la población dependa de estructuras criminales para satisfacer sus necesidades básicas (Sánchez, 2025).

Propuesta de articulación interinstitucional e inteligencia estratégica

En el contexto de la frontera colombo-venezolana, caracterizada por la presencia activa de Grupos Armados Organizados (GAO), economías ilegales y una intensa movilidad humana, la inteligencia estratégica se presenta como un instrumento fundamental para orientar la política de seguridad y defensa. A diferencia de la inteligencia táctica u operacional, centradas en objetivos concretos de corto plazo, la inteligencia estratégica se inscribe en un nivel de análisis más amplio, donde confluyen variables políticas, geográficas, sociales y

Escuela Superior de Guerra “General Rafael Reyes Prieto”

Bogotá D.C., Colombia

militares que determinan las decisiones de alto nivel. Tal como lo plantea Sherman Kent, este tipo de inteligencia se encuentra en constante tensión con otros productores de conocimiento estratégico, como los decisores políticos o los centros académicos, lo que obliga a construir narrativas sólidas, verificables y oportunas para incidir en la formulación de políticas públicas eficaces.

Tabla 4. *Propuesta de articulación interinstitucional e inteligencia estratégica*

Propuesta	Teoría de respaldo	Descripción
Creación de una red interinstitucional de inteligencia estratégica	Teoría del neorrealismo (Sherman Kent) – Estatura estratégica y competencia narrativa	Establecer mecanismos formales de coordinación entre Migración, Fuerzas Armadas, Policía, alcaldías y agencias de inteligencia para consolidar una inteligencia estratégica integral.
Descentralización del análisis estratégico hacia el nivel territorial	Geopolítica crítica – Seguridad desde lo local y soberanía efectiva	Transferir capacidades analíticas al nivel local, garantizando acceso a datos y análisis por parte de autoridades territoriales para una respuesta contextualizada.
Uso de herramientas de prospectiva y escenarios	Prospectiva estratégica (Aguirre, 2013) – Construcción de escenarios	Aplicar técnicas de escenarios futuros para anticipar movimientos de los GAO, planificar acciones preventivas y orientar políticas públicas de largo plazo.
Integración de actores civiles en el diseño de seguridad fronteriza	Seguridad ampliada (Barry Buzan) – Enfoque multidimensional de las amenazas	Incluir a entidades civiles y sociales en la formulación de estrategias de seguridad, reconociendo las dinámicas sociales, económicas y culturales del territorio.
Plataforma interoperable de inteligencia con enfoque geoespacial	Clausewitz – Inteligencia como base para la estrategia militar y política	Desarrollar una plataforma digital que integre datos geoespaciales, inteligencia humana y tecnológica para permitir el análisis en tiempo real y la toma de decisiones conjuntas.

Nota. Fuente: Elaboración propia

La dinámica actual en la zona de frontera refleja un entorno complejo en el que confluyen múltiples fuentes de riesgo y oportunidad. Las Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo entre 2022 y 2024 señalan un proceso de recomposición territorial por parte de los GAO, que han aprovechado la reapertura de los pasos fronterizos para expandir su

influencia tanto en zonas rurales como urbanas. En este escenario, la ausencia de articulación interinstitucional entre actores como Migración Colombia, las Fuerzas Armadas, las alcaldías municipales y las agencias de inteligencia ha dificultado la implementación de estrategias coordinadas (Mutis et al., 2021). La carencia de canales unificados de información y la inexistencia de un sistema de comando y control interoperable limitan la capacidad de respuesta del Estado frente a amenazas transnacionales (Álvarez, 2021).

Por lo tanto, la frontera puede ser interpretada como un espacio estratégico que incide directamente en la estatura estratégica del Estado, entendida esta como la suma de sus capacidades para ejercer influencia en un entorno internacional cambiante. Según Kent, alcanzar dicha estatura requiere no solo medios materiales, sino también una voluntad política sostenida y una correcta gestión de la información. En este sentido, la inteligencia estratégica no solo cumple una función defensiva al anticipar amenazas, sino también una función ofensiva al permitir que el Estado proyecte su poder mediante acciones diplomáticas, coercitivas o disuasivas. En el caso colombiano, esta doble función podría orientarse hacia el fortalecimiento de una gobernanza fronteriza que combine presencia territorial, diplomacia local y tecnología de punta.

Autores como Aguirre enfatizan que la inteligencia estratégica se nutre de múltiples disciplinas y herramientas analíticas como la vigilancia tecnológica, la prospectiva y la gestión del conocimiento. En el contexto de Norte de Santander, donde los flujos migratorios, los corredores del narcotráfico y las economías informales coexisten, la aplicación de técnicas de construcción de escenarios podría contribuir a identificar trayectorias posibles del conflicto y del crimen organizado (Aliaga, 2021). Estas herramientas permitirían a las

entidades estatales anticiparse a las mutaciones operativas de los GAO, optimizar la asignación de recursos y diseñar planes de intervención territorial más adaptativos.

No obstante, el éxito de estas herramientas depende de su apropiación por parte de las instituciones que operan en terreno. La fragmentación actual impide que la inteligencia producida en Bogotá o en los centros nacionales se traduzca en decisiones efectivas a nivel local. Las autoridades municipales reportan con frecuencia la falta de acceso a información sensible y la imposibilidad de incidir en las estrategias de seguridad diseñadas por el nivel central. Esta brecha entre el conocimiento producido y la acción territorial compromete la eficacia de la inteligencia estratégica como instrumento de gobierno, lo que sugiere la necesidad de consolidar una red interinstitucional con canales fluidos de comunicación, protocolos comunes y objetivos compartidos.

Desde el pensamiento estratégico clásico, Clausewitz sostiene que la estrategia es el uso de los medios para alcanzar los fines de la guerra, y que estos medios deben ser coherentes con las fuerzas morales, espirituales y materiales disponibles (Grautoff, 2007). En ese marco, la inteligencia estratégica cumple un papel esencial al ofrecer información confiable que sustente las decisiones políticas y militares. La calidad de esta información puede determinar el éxito o el fracaso de las operaciones, como lo demuestra el ejemplo de la intervención en Iraq en 2003, donde una lectura errónea del contexto geopolítico condujo a una crisis prolongada (Rojas, 2015). En el caso colombiano, una inteligencia estratégica robusta podría prevenir errores similares, ofreciendo insumos precisos sobre las motivaciones, alianzas y capacidades de los actores ilegales que operan en la frontera.

Por otra parte, la geopolítica del siglo XXI ha desplazado el enfoque tradicional centrado exclusivamente en las amenazas militares, para incorporar nuevas dimensiones como la seguridad humana, la movilidad transfronteriza y la sostenibilidad. En este contexto, la inteligencia estratégica debe articularse con herramientas de análisis geoespacial, antropológico y económico, lo que demanda la creación de equipos interdisciplinarios y bases de datos compartidas. La ausencia de estos componentes en la política actual de seguridad fronteriza limita la capacidad del Estado para comprender las lógicas locales del conflicto y para construir legitimidad ante las comunidades afectadas.

La articulación interinstitucional, entonces, no puede entenderse únicamente como un mecanismo de coordinación entre fuerzas de seguridad. Debe incluir a actores civiles como los entes territoriales, los servicios sociales, las organizaciones de la sociedad civil y las universidades, para que el diseño de la seguridad fronteriza responda a una visión multidimensional. Esta perspectiva encuentra sustento teórico en los postulados de Barry Buzan sobre seguridad ampliada, en donde se reconoce que las amenazas no solo provienen de otros Estados o actores armados, sino también de fenómenos como el colapso institucional, la exclusión social o la degradación ambiental.

Medidas para la contención del crimen transnacional y la gobernanza territorial

Una medida prioritaria para la contención del crimen transnacional consiste en la consolidación de corredores de control territorial. En concordancia con la teoría de la geografía del poder desarrollada por Yves Lacoste, esta acción tiene como propósito garantizar el dominio efectivo del Estado sobre espacios estratégicos tales como ejes viales,

Escuela Superior de Guerra “General Rafael Reyes Prieto”

Bogotá D.C., Colombia

afluentes hídricos y pasos fronterizos que hoy son explotados por redes criminales transnacionales. En tal sentido, se plantea un control simultáneo desde las dimensiones física, simbólica y administrativa, lo cual permite no solo interrumpir flujos ilícitos, sino también reafirmar la soberanía nacional y proyectar autoridad institucional en territorios periféricos(Dalby, 1996).

Adicionalmente, se considera fundamental la implementación de mecanismos de gobernanza multinivel, como respuesta estructural a la fragmentación institucional evidenciada en las zonas de frontera. A partir de los postulados de Rosenau (1992) sobre gobernanza sin gobierno, se propone articular de manera funcional los niveles nacional, regional y local, incorporando de forma activa a las comunidades fronterizas como agentes clave en la gestión del territorio. Este enfoque reconoce que la lucha contra el crimen transnacional requiere una arquitectura estatal cohesionada, capaz de coordinar funciones sin duplicidades ni vacíos institucionales.

Al mismo tiempo, el fortalecimiento de la justicia local y de los mecanismos comunitarios de resolución de conflictos se erige como un pilar para garantizar el Estado de Derecho en zonas de alta vulnerabilidad. Desde el enfoque de seguridad humana promovido por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), se advierte que la ausencia o debilidad de operadores judiciales ha sido aprovechada por los Grupos Armados Organizados (GAO) para imponer formas ilegítimas de control social. Por consiguiente, se hace necesario robustecer la presencia de jueces, fiscales y defensores públicos, a fin de restituir la confianza ciudadana en las instituciones formales de justicia.

Al mismo tiempo, resulta estratégico impulsar programas de desarrollo alternativo orientados a sustituir las economías ilícitas que sustentan a muchas comunidades fronterizas.

Escuela Superior de Guerra “General Rafael Reyes Prieto”

Bogotá D.C., Colombia

Apoyándose en la teoría del desarrollo periférico de Raúl Prebisch y en los lineamientos estructurales de la CEPAL, esta medida sugiere invertir en iniciativas productivas sostenibles, adaptadas a las condiciones geográficas y socioculturales del territorio. Lo anterior permitiría generar opciones económicas legítimas, especialmente para poblaciones históricamente marginadas, reduciendo con ello la cooptación social por parte de estructuras criminales.

En línea con los desafíos del contexto actual, la integración de tecnologías avanzadas de vigilancia y análisis geoespacial representa otra medida de alto impacto. A la luz de la geopolítica tecnológica planteada por Robert Kaplan y Joseph Nye, se plantea el uso de sensores, cámaras, drones, software predictivo e infraestructuras interoperables que fortalezcan la capacidad de monitoreo del Estado (Gomichon, 2013). Tales tecnologías permiten generar alertas tempranas, identificar patrones de riesgo y coordinar respuestas interinstitucionales desde los centros de mando, lo cual optimiza la eficiencia operativa frente a amenazas dinámicas.

Asimismo, se considera imprescindible emprender campañas de legitimidad institucional enfocadas en reconstruir el vínculo entre la población y el Estado en zonas fronterizas. Esta acción, fundamentada en la teoría del contrato social de Rousseau, implica acciones concretas de presencia estatal continua, resolución de necesidades básicas, y generación de confianza mediante símbolos, discursos y servicios tangibles. En este marco, se busca contrarrestar la narrativa de abandono que los GAO han instrumentalizado para legitimar su presencia.

Discusión

Los resultados obtenidos en esta investigación cualitativa permiten afirmar que las estrategias de contención del crimen transnacional en la frontera colombo-venezolana no pueden seguir basándose exclusivamente en enfoques militarizados o de control fronterizo convencional. Desde una perspectiva geopolítica, estos enfoques han demostrado ser insuficientes para afirmar el poder del Estado en territorios periféricos donde confluyen múltiples actores armados ilegales, economías criminales transnacionales y vacíos de soberanía. En cambio, los hallazgos indican que un enfoque integral, que combine control territorial efectivo, legitimidad institucional, desarrollo alternativo y cooperación interestatal, constituye una estrategia más coherente para consolidar la presencia del Estado y reposicionar su capacidad de proyección geopolítica en zonas de disputa o baja gobernabilidad. Con ello, se responde a la pregunta central del estudio: ¿Cuáles han sido las implicaciones geopolíticas de la apertura de la frontera de Norte de Santander en el crecimiento de los GAO y el incremento de amenazas transnacionales? En ese marco, se confirma la hipótesis inicial según la cual la contención del crimen transnacional en zonas de frontera requiere una gobernanza multinivel que supere la fragmentación institucional y responda a las tensiones geoestratégicas propias del territorio.

Entre 2022 y 2024, la apertura de la frontera en Norte de Santander ha tenido implicaciones geopolíticas que se expresan en tres dimensiones principales: (i) la reconfiguración del control territorial por parte de grupos armados organizados ELN, disidencias de las FARC, Ejército Gaitanista de Colombia y redes transnacionales como el Tren de Aragua, que han aprovechado la mayor movilidad y ausencia de control binacional

Escuela Superior de Guerra “General Rafael Reyes Prieto”

Bogotá D.C., Colombia

para expandir sus áreas de influencia; (ii) el fortalecimiento de economías ilícitas transfronterizas, incluyendo narcotráfico, contrabando, trata de personas y extorsión, que se articulan con redes criminales internacionales y erosionan la soberanía estatal; y (iii) la consolidación de un “orden no estatal” en zonas rurales y urbanas fronterizas, donde los GAO ejercen funciones de autoridad de facto, afectando la gobernanza y la seguridad regional. Estas dinámicas han incrementado las amenazas transnacionales, al convertir la frontera colombo-venezolana en un nodo estratégico para el crimen organizado en América Latina y en un factor de inestabilidad para la seguridad nacional(Lagos, 2024).

La articulación interinstitucional, el fortalecimiento de la inteligencia estratégica y la recuperación del monopolio de la fuerza legítima se configuran como herramientas esenciales para afirmar la soberanía nacional frente a actores no estatales que disputan control territorial. En efecto, estas consideraciones se alinean con los planteamientos de Martínez et al. (2024), quienes conceptualizan la frontera como un espacio geopolítico fluido y fragmentado, donde las políticas de seguridad deben incorporar dinámicas de desarrollo, identidad y poder. Asimismo, los resultados refutan parcialmente visiones como la de Reyes (2022), que insisten en reforzar la securitización del límite fronterizo sin atender la complejidad socio territorial ni las relaciones transfronterizas informales que configuran la cotidianidad de la región.

Un hallazgo revelador desde la óptica geopolítica es el profundo nivel de desconfianza que manifiestan las comunidades locales hacia el Estado colombiano, incluso en presencia de infraestructura y personal institucional. Esta desconfianza, interpretada como una erosión del capital simbólico del Estado, evidencia una pérdida del control ideológico y cultural sobre el territorio, facilitando que Grupos Armados Organizados (GAO) ocupen

Escuela Superior de Guerra “General Rafael Reyes Prieto”

Bogotá D.C., Colombia

espacios no solo físicos sino también de legitimidad. En términos de geografía del poder al estilo de Yves Lacoste, la soberanía no se ejerce únicamente con presencia militar, sino con capacidad de interlocución, protección social y administración efectiva de justicia (Dalby, 1996). Esta disociación entre el territorio y el poder formal pone en evidencia una fragmentación del espacio nacional que debilita la posición geoestratégica del Estado frente a sus fronteras y actores externos.

Entre las principales limitaciones del estudio se encuentra el acceso restringido a información de primera mano debido al nivel de riesgo en zonas dominadas por economías ilícitas y estructuras armadas. Asimismo, la delimitación territorial del análisis al eje Norte de Santander y Táchira obliga a una lectura contextualizada, ya que otras regiones fronterizas como La Guajira, Arauca o el Vaupés presentan dinámicas geopolíticas propias, influenciadas por factores étnicos, recursos naturales o economías extractivas. Adicionalmente, el enfoque metodológico cualitativo, si bien permite un análisis profundo del fenómeno, no busca generalización estadística, sino la identificación de patrones y tensiones relevantes.

Por último, el estudio propone múltiples líneas de investigación futuras orientadas por la lógica geopolítica. Entre ellas se destacan: el análisis comparado de estrategias de gestión de fronteras en espacios geopolíticamente sensibles como el Sahel africano o la triple frontera en Sudamérica; la evaluación del uso estratégico de tecnología de vigilancia en zonas de alta disputa territorial; y la creación de indicadores de soberanía efectiva en territorios periféricos. Así mismo, se recomienda impulsar investigaciones participativas con comunidades locales que integren el saber territorial al diseño de políticas públicas,

fortaleciendo de este modo tanto la legitimidad interna como la proyección externa del Estado en su frontera.

Conclusiones

La reapertura de la frontera entre Colombia y Venezuela en 2022 generó una reconfiguración significativa del escenario geopolítico en Norte de Santander. La conclusión central de este capítulo es que la decisión diplomática de restablecer el tránsito binacional, aunque buscaba normalizar relaciones y promover el comercio, no fue acompañada de una planeación integral en materia de seguridad. Esta carencia permitió que estructuras ilegales aprovecharan el nuevo contexto para ampliar su presencia y fortalecer las economías ilícitas. Se confirma así que la apertura fronteriza, sin medidas simultáneas de control y gobernanza, puede convertirse en un factor de riesgo para la seguridad nacional y regional.

La revisión de teorías geopolíticas clásicas y críticas, así como de conceptos como seguridad multidimensional y gobernanza territorial, permitió concluir que las fronteras deben entenderse más allá de una línea divisoria física: son espacios de interacción compleja, con actores estatales y no estatales que disputan poder. En el caso de Norte de Santander, se evidenció que la soberanía no se ejerce exclusivamente mediante presencia militar, sino también mediante legitimidad institucional, inversión social y articulación multinivel. Este capítulo aporta una base conceptual para explicar por qué el vacío estatal es rápidamente ocupado por grupos armados y redes ilícitas, debilitando la proyección geopolítica de Colombia.

Del análisis histórico se concluye que la porosidad y conflictividad de la frontera colombo-venezolana tienen raíces estructurales: desde la disolución de la Gran Colombia y

la falta de delimitación clara hasta el abandono estatal y las tensiones ideológicas entre gobiernos. Estos antecedentes han configurado una frontera históricamente vulnerable, donde los vacíos institucionales son aprovechados por actores ilegales. Asimismo, se identificó que la reapertura en 2022 no modificó sustancialmente estos patrones; por el contrario, los exacerbó, al no existir coordinación binacional ni fortalecimiento del control estatal en zonas críticas.

El estudio demostró que tras la reapertura se produjo una reorganización táctica de los GAO en Norte de Santander. La conclusión de este capítulo es que el ELN, las disidencias de las FARC, el EGC y redes como el Tren de Aragua consolidaron su control sobre corredores estratégicos y zonas urbanas, ejerciendo funciones de autoridad paralela. Este fenómeno refleja una soberanía fragmentada y la formación de enclaves criminales con gobernanza híbrida, lo cual incrementa la inseguridad y erosiona el poder del Estado. También se concluye que la presencia militar, aunque importante, resulta insuficiente sin acompañamiento de inversión social, justicia y políticas de desarrollo.

Al contrastar la frontera con Venezuela y la de Ecuador, se concluye que, aunque ambas comparten características de porosidad y debilidad institucional, la frontera con Venezuela presenta mayores niveles de complejidad debido a la crisis humanitaria, la ruptura prolongada de relaciones diplomáticas y el mayor número de grupos armados presentes. La lección clave es que la cooperación binacional sostenida, como la que existe entre Colombia y Ecuador en años recientes, puede mitigar riesgos, mientras que su ausencia los exagera, como ocurre en Norte de Santander.

Este capítulo permite concluir que la reapertura incrementó el tráfico de drogas, armas, contrabando y trata de personas. Se identificó una relación directa entre la movilidad

Escuela Superior de Guerra “General Rafael Reyes Prieto”

Bogotá D.C., Colombia

fronteriza sin controles efectivos y el fortalecimiento de las redes transnacionales. La debilidad de los sistemas de inteligencia y la falta de interoperabilidad entre instituciones estatales contribuyeron al agravamiento de la criminalidad organizada. Esta conclusión refuerza la necesidad de abordar la seguridad fronteriza con un enfoque integral y tecnológico.

El objetivo general de la investigación consistía en analizar las implicaciones geopolíticas de la apertura fronteriza en Norte de Santander en relación con la expansión de los GAO y las amenazas transnacionales entre 2022 y 2024. Este objetivo se cumplió plenamente: el estudio evidenció que la reapertura, sin planeación integral, favoreció la consolidación de actores armados y economías ilícitas, debilitó la soberanía estatal y aumentó la inseguridad regional. Igualmente, se aportó un marco teórico y estratégico para comprender cómo la frontera es un espacio de disputa de poder, y se formularon recomendaciones de gobernanza multinivel e inteligencia estratégica. Con ello, el trabajo ofrece insumos valiosos para el diseño de políticas públicas en seguridad y defensa con enfoque geoestratégico y multidimensional, alineadas con la necesidad de proteger a la población y proyectar estabilidad en territorios periféricos.

Asimismo, el estudio permitió demostrar que la noción de gobernanza territorial multinivel cobra relevancia geopolítica en contextos como el de Norte de Santander y el Táchira, donde la fragmentación institucional, la debilidad del aparato estatal y la desconfianza comunitaria configuran un escenario de disputa por el poder local. En ese sentido, la investigación aporta un marco interpretativo desde el cual puede analizarse cómo el Estado reconstruye su estatura estratégica en zonas periféricas afectadas por redes criminales y déficit de legitimidad.

La contribución más significativa de este estudio radica en demostrar que la seguridad fronteriza, vista desde una óptica geopolítica, implica no solo el control físico del territorio, sino también la construcción de legitimidad, la administración efectiva del espacio y la capacidad para proyectar poder y presencia de forma sostenida. Al abordar la frontera como un espacio estratégico de poder y no solo como una zona periférica, esta investigación ofrece una base interpretativa útil para comprender los desafíos contemporáneos que enfrentan los Estados en escenarios de conflictividad transnacional, donde la soberanía ya no se ejerce únicamente desde la fuerza, sino desde la capacidad de gobernar de manera integral un territorio disputado.

Referencias

- Acevedo, N. C., Ballesteros, B. V., & Corcione, N. M. A. (2022). Seguridad humana y seguridad multidimensional, su enfoque y utilidad para proteger los derechos humanos. *Revista Científica General José María Córdova*, 20(40). <https://doi.org/10.21830/19006586.1081>
- Aliaga, S. F. A. (2021). Causas de la migración forzada de Venezuela a Colombia. *AULA Revista de Humanidades y Ciencias Sociales*, 67(2). <https://doi.org/10.33413/aulahcs.2021.67i2.180>
- Álvarez, C. (2021). Efectos de la migración de venezolanos a Colombia. *Universidad Del Rosario*. *Repositorio Institucional UR*.
<https://repository.urosario.edu.co/server/api/core/bitstreams/e71bd5e2-02c7-4843-8d90-fb8aa2fc61f7/content>
- Ardila, M., Lozano, J. I., & Quintero, M. A. (2021). Dinámicas, vulnerabilidades y prospectiva de la frontera colombo-venezolana TT - Dynamics, Vulnerabilities and prospects of the Colombian-Venezuelan Border. *Iconos*, 25(2).
- Arenas, P. A. J., Vargas, G. F. C., Rondón, N. E. A., & Ramos, H. C. E. (2023). Delincuencia organizada transnacional en la frontera colombovenezolana. In *Colombia: avances y desafíos*

Escuela Superior de Guerra “General Rafael Reyes Prieto”
Bogotá D.C., Colombia

- frente a la delincuencia organizada transnacional* (pp. 61–86). Escuela Militar De Cadetes General José María Córdova. <https://doi.org/10.21830/9786289544602.03>
- Arroyo, A. A. L. (2013). Inestabilidad, costo de vida y salarios reales en Venezuela en el siglo XIX. *América Latina En La Historia Económica*, 20(3). <https://doi.org/10.18232/alhe.v20i3.551>
- Badillo, R., & Bravo, A. (2020). Crimen transnacional organizado y migración: El Clan del Golfo y grupos delictivos en América Latina y África. *Internacia: Revista de Relaciones Internacionales*, 1.
- Baqués, Q. J. (2019). El mar como catalizador de la geopolítica: de Mahan al auge chino. *Revista de Estudios En Seguridad Internacional*, 5(1). <https://doi.org/10.18847/1.9.9>
- Barrientos, M. B. R., Prieto, T. J., & Mariño, C. F. (2023). Reclutamiento, migración y seguridad fronteriza: aproximación al caso Colombia-Venezuela, 2016-2020. In *Migración y seguridad hemisférica en las Américas* (pp. 37–67). Escuela Superior de Guerra “General Rafael Reyes Prieto.” <https://doi.org/10.25062/9786287602267.02>
- Blackwell, A. (2021). Seguridad multidimensional: “enfrentando nuevas amenazas.” *Seguridad, Ciencia & Defensa*, 1(1). <https://doi.org/10.59794/rscd.2015.v1i1.pp153-158>
- Borrero, M. (2022). La frontera colombo-venezolana: Un lindero problemático. En Centro de Estudios Estratégicos en Seguridad y Defensa Nacionales (CSEDN), Nuevas amenazas en el siglo XXI: Fronteras y derechos humanos (Capítulo de libro). . *Escuela Superior de Guerra “General Rafael Reyes Prieto”*. <https://esdeglibros.edu.co/index.php/editorial/catalog/download/73/96/1235?inline=1>
- Buzan, B. (2008). People, States & Fear: An Agenda for International Security Studies in the post-Cold War Era (introducción y capítulo 10). In *Relaciones internacionales: Revista académica cuatrimestral de publicación electrónica* (Issue 9).
- Castro, R. S., Corrales, J., Burbano, V. E. L., & Coral, V. A. A. (2022). Migración, retorno y emprendimiento en Colombia. *Revista Venezolana de Gerencia*, 27(Edición Especial 7). <https://doi.org/10.52080/rvgluz.27.7.3>
- Chaliand, G. (2024). Nicholas Spykman (1893-1943). In *Art of War in World History*. <https://doi.org/10.1525/9780520354883-110>

Escuela Superior de Guerra “General Rafael Reyes Prieto”
Bogotá D.C., Colombia

- Dalby, S. (1996). Writing critical geopolitics: Campbell, Ó Tuathail, Reynolds and dissident skepticism. *Political Geography*, 15(6–7). [https://doi.org/10.1016/0962-6298\(96\)00035-2](https://doi.org/10.1016/0962-6298(96)00035-2)
- Defensoría del Pueblo. (2024a). Alerta Temprana No. 027-2024: Riesgos para la población civil en los municipios de San José de Cúcuta, Villa del Rosario, Los Patios y Puerto Santander (Norte de Santander). *Sistema de Alertas Tempranas (SAT)*.
<https://alertasstg.blob.core.windows.net/alertas/027-24.pdf>
- Defensoría del Pueblo. (2024b). *Alerta temprana N.º 045. Nombre del proceso/subproceso: Prevención y protección (Código: PP-P01-F10, Vers. 02)*. .
- Díaz, G. J. A. (2019). Populismo y política exterior: los casos de los gobiernos de Hugo Chávez (Venezuela) y Rafael Correa (Ecuador). *Papel Político*, 24(1).
<https://doi.org/10.11144/javeriana.papo24-1.ppec>
- Duarte, P. (2015). Viaje al centro de la Tierra: La geopolítica del heartland. *Revista Geografica Venezolana*, 56(1).
- EFE, & AFP. (2025). 63 disidentes de las FARC se desmovilizan en Catatumbo. . *Deutsche Welle (DW)*. . <https://www.dw.com/es/colombia-63-disidentes-de-las-farc-se-desmovilizan-en-catatumbo/a-71411423>
- Fernández, O. A. E., Moreno, P. J. E., Bahamón, J. M. L., & Villalba, G. L. F. (2023). Nuevos escenarios y retos en seguridad y defensa para las Fuerzas Armadas de Colombia. *IUSTA*, 57. <https://doi.org/10.15332/25005286.9083>
- Gangi, G. G. K. V. (2023). Dinámicas migratorias en la frontera colombo-venezolana y su relación con la criminalidad transnacional. *Revista Científica General José María Córdova*, 21(44), 907–924. <https://doi.org/10.21830/19006586.984>
- Gomichon, M. (2013). Joseph Nye on soft power. *E-International Relations*.
- González, T. L. (2017). Organización del espacio global en la geopolítica “clásica”: una mirada desde la geopolítica crítica. *Revista Relaciones Internacionales, Estrategia y Seguridad*, 13(1), 221–238. <https://doi.org/10.18359/ries.2864>

Escuela Superior de Guerra “General Rafael Reyes Prieto”
Bogotá D.C., Colombia

Grautoff, L. M. E. (2007). De Clausewitz a la guerra asimétrica: una aproximación empírica.

Revista de Relaciones Internacionales, Estrategia y Seguridad, 2(1).

<https://doi.org/10.18359/ries.194>

Günther, M. (2024). La expansión del Tren de Aragua, red criminal transnacional. *Deutsche Welle*.

<https://www.dw.com/es/el-tren-de-aragua-la-expansi%C3%B3n-de-una-red-criminal-transnacional/a-69595842>

Hernández, A. D. (2017). Las FARC-EP en Suramérica: Una aproximación desde la teoría de los Complejos de Seguridad Regional. *Revista Internacional de Cooperación y Desarrollo*, 4(1).

<https://doi.org/10.21500/23825014.3119>

InSight Crime. (2023). *Tren de Aragua*. <https://insightcrime.org/es/noticias-crimen-organizado-venezuela/tren-de-aragua/>

Lagos, F. R. (2024). Criminalidad organizada transnacional: de la seguridad pública a la amenaza geopolítica. *Politai*, 15(25), 17–32. <https://doi.org/10.18800/politai.202402.001>

Martínez, A., Emmerich, N., & Morales, M. (2024). Fronteras del mundo: migración, geopolítica y delincuencia. . *Universidad Autónoma de Ciudad Juárez*.

[https://www.researchgate.net/profile/Carlos-Gonzalez-](https://www.researchgate.net/profile/Carlos-Gonzalez-Macias/publication/378825302_Encuentro_de_ideas_Un_mosaico_de_aportaciones_interdisciplinarias_al_conocimiento_Dedicado_al_Dr_Adan_Valles_Chavez_Decano_de_la_DEPI_TecNM_IT_de_Cd_Juarez/links/65eb69b79ab2af0ef8980496/Encuentro-de-ideas-Un-mosaico-de-aportaciones-interdisciplinarias-al-conocimiento-Dedicado-al-Dr-Adan-Valles-Chavez-Decano-de-la-DEPI-TecNM-IT-de-Cd-Juarez.pdf#page=16)

[Macias/publication/378825302_Encuentro_de_ideas_Un_mosaico_de_aportaciones_interdisciplinarias_al_conocimiento_Dedicado_al_Dr_Adan_Valles_Chavez_Decano_de_la_DEPI_TecNM_IT_de_Cd_Juarez/links/65eb69b79ab2af0ef8980496/Encuentro-de-ideas-Un-mosaico-de-aportaciones-interdisciplinarias-al-conocimiento-Dedicado-al-Dr-Adan-Valles-Chavez-Decano-de-la-DEPI-TecNM-IT-de-Cd-Juarez.pdf#page=16](https://www.researchgate.net/profile/Carlos-Gonzalez-Macias/publication/378825302_Encuentro_de_ideas_Un_mosaico_de_aportaciones_interdisciplinarias_al_conocimiento_Dedicado_al_Dr_Adan_Valles_Chavez_Decano_de_la_DEPI_TecNM_IT_de_Cd_Juarez/links/65eb69b79ab2af0ef8980496/Encuentro-de-ideas-Un-mosaico-de-aportaciones-interdisciplinarias-al-conocimiento-Dedicado-al-Dr-Adan-Valles-Chavez-Decano-de-la-DEPI-TecNM-IT-de-Cd-Juarez.pdf#page=16)

Martínez Cortés, J. M. (2022). El nuevo entorno operativo y las operaciones espaciales. *Revista Del Instituto Español de Estudios Estratégicos N. 20*.

Mutis, O. , O. M., Ríos, I. , C. J., Montaña, G. , L. M., & Monroy, R. , V. (2021). Crisis u

oportunidad: impacto de la migración venezolana en la productividad colombiana. *Revista Desarrollo y Sociedad*, 89. <https://doi.org/10.13043/dys.89.1>

Navarro, C., & Cristancho. (2023). Migración y seguridad fronteriza Colombia – Venezuela: una revisión sistemática. . *Mundo FESC*, 13(S1), 328-349.

<file:///C:/Users/USER/Downloads/Art.+13.pdf>

Escuela Superior de Guerra “General Rafael Reyes Prieto”
Bogotá D.C., Colombia

- Newton, C., & Manjarrés, J. (2024). *Balance de InSight Crime de incautaciones de cocaína de 2023*. *InSight Crime*. <https://insightcrime.org/es/noticias/balance-insight-crime-incautaciones-cocaina-2023/>
- Nye, J. (2010). El poder blando y la política exterior americana. *Relaciones Internacionales*, 14.
- Nye, J. S. (2010). Prefacio y Capítulo 5 “El poder blando y la política exterior norteamericana”. *Relaciones Internacionales*, 14.
- Organización Internacional para las Migraciones. (2024). *World Migration Report 2024*. *International Organization for Migration*. . <https://worldmigrationreport.iom.int/msite/wmr-2024-interactive/>
- Palacios, T. N. (2021). Elecciones en la Gran Colombia, 1818-1830. *Procesos. Revista Ecuatoriana de Historia*, 54. <https://doi.org/10.29078/procesos.v.n54.2021.2541>
- Paulsen, B. A. (2017). Los aportes de Friedrich Ratzel y Halford Mackinder en la construcción de la geografía política en tiempos de continuidades y cambios. *Espacios*, 5(9). <https://doi.org/10.25074/07197209.9.372>
- Peñaranda, P. L. P., Hernández, U. G. K., Mogrovejo, andrade, J. M., Bastos, O. L. M., & Mera, R. O. A. (2022). Catatumbo: análisis de los factores socioeconómicos y su relación con la productividad de la región. *Clío América*, 16(31). <https://doi.org/10.21676/23897848.4853>
- Pizarro, L. E. (2024). *Las fronteras y la guerra*. Institución Universitaria Comando de Educación y Doctrina. <https://doi.org/10.47961/9786289627770>
- Reyes, R. (2022). Gustavo Petro: un cambio en la geopolítica colombiana. *Instituto Español de Estudios Estratégicos* . https://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_analisis/2022/DIEEEA67_2022_ROCREY_Colombia.pdf
- Rojas, G. P. J. (2015). Operaciones conjuntas: Operación Libertad para Irak y su comparación con la estrategia militar conjunta en Colombia. *Papel Político*, 20(2). <https://doi.org/10.11144/javeriana.papo20-2.ocol>
- Rosales, G. (2005). Geopolítica y Geoestrategia, Liderazgo y Poder. *Publicaciones y Comunicaciones UMNG*.

Escuela Superior de Guerra “General Rafael Reyes Prieto”
Bogotá D.C., Colombia

Sampieri. (2014). Metodología de la investigación. *Metodología de La Investigación (6ta Ed.)*.
McGraw-Hill.

https://apiperiodico.jalisco.gob.mx/api/sites/periodicooficial.jalisco.gob.mx/files/metodologia_de_la_investigacion_-_roberto_hernandez_sampieri.pdf

Sánchez, C. (2025). El acuerdo para una zona binacional firmado por Petro y Maduro hace oídos sordos a los habitantes en la frontera. *El País*. <https://elpais.com/america-colombia/2025-07-31/el-acuerdo-para-una-zona-binacional-firmado-por-petro-y-maduro-hace-oidos-sordos-a-los-habitantes-en-la-frontera.html>

Smith, W. D. (1980). Friedrich Ratzel and the Origins of Lebensraum. *German Studies Review*, 3(1). <https://doi.org/10.2307/1429483>

Suarez, P. R. A. (2024). *La prohibición de uso de minas antipersonas en el conflicto armado colombiano; caso Catatumbo, Norte de Santander*.
<https://repository.unilibre.edu.co/handle/10901/28953>